

# SUPLEMENTO

## AL NÚMERO 47 DEL OBSERVADOR,

Del Sábado 30 de Agosto de 1834.

Ademas, sin oponerme á la peticion, quisiera tambien que los que la han redactado, se tomasen la molestia de volverla á ver, porque una cosa que se presenta en nombre del Estamento, es necesario que se haga con cierta circunspeccion, que no se halle ningun punto en vago, y noto aqui que á pesar de que los que han examinado esta cuestion por la parte erudita, por decirlo asi, han convenido en la falsedad de la batalla de Clavijo, y han considerado como un baldon que no ha existido, el tributo de las cien doncellas: ó yo no he concebido bien la peticion, ó en ella se da por cierta dicha batalla, lo que parece mas extraño cuando dos señores de los que la firman han sostenido lo contrario; y no se puede dar por cierto un hecho que por lo menos es dudoso. Digo, pues, que tambien en esta parte merece que se vuelva á ver la peticion.

El Sr. Caballero. — Habiendo varios señores Procuradores ilustrado esta cuestion de una manera tal que no puede quedar duda relativamente al origen apócrifo, á lo injusto del tributo, y á la necesidad de abolirle, me limitaré solamente á hacer algunas reflexiones sobre la última parte de la peticion, pues que el señor secretario de Estado se ha concretado principalmente á ella. Verdaderamente que examinadas las cosas bajo los principios sagrados del derecho, hasta que se ha declarado la abolicion de una contribucion cualquiera, parece que no se debe privar de su percepcion al que la ha estado poseyendo; mas aqui es necesario tener en consideracion por qué motivo se trata de declarar nulo el voto de Santiago: apoyada esta nulidad en su injusticia, es claro que será tambien nulo lo devengado, y la prueba mas convincente de que así sucederá, la voy á sacar del mismo proyecto de ley del gobierno. El señor ministro ha leído el artículo 3 de dicho proyecto, donde dice, que respecto de los pleitos pendientes y divisiones que haya habido entre los perceptores y contribuyentes, se decidirá en los tribunales competentes, suprimiéndose esa jurisdiccion monstruosa y peculiar que sostenia el tributo. Claro está que los obligados á pagar de este modo hasta el día en que esté abolido, tendrán derecho á ejecutar el pago por medio de un juicio conciliatorio, y que puesto que el gobierno y todo hombre sensato reconoce que no es justo tal privilegio, y que es un abuso, probarán digo, que no hay derecho para cobrar como se falló en los pleitos en que se trató de este principio con toda la fuerza legal. Si pues esto ha de suceder así ¿por qué se encuentra tanta injusticia, tanta inconveniencia en que se declare que no se deben pagar los caídos? — Repito, pues, que si se reconoce el origen vicioso del voto, que ni ha podido haber prescripcion, porque para esta lo primero que se necesita es título legítimo que no ha existido, debe cesar la exaccion en el estado en que se halla. No es esto dar un ejemplo de inmoralidad á los pueblos, como ha dicho el señor marques de Falces, ni hay relacion entre esta y otras contribuciones que se pagan: no hay inmoralidad porque desde luego se conoce que el beneficio no resultaría á los morosos por no haber querido pagar, sino por no haber podido; pues con un tribunal tan riguroso como el que ha existido el que no haya pagado no habrá sido sino por haberse hallado en imposibilidad de hacerlo, y por consiguiente no resulta premio para los morosos. Se compara esta con otras contribuciones; ¿pueden otras contribuciones igualarse con este voto injusto? Que ¿los pueblos no sabrán hacer la distincion debida, y se resistirán á pagarlas hasta que sean abolidas? Ademas, cuando el gobierno y las Cortes acuerden la supresion de una contribucion, es bien claro que se pensará en suplir la falta que á tal ó tal individuo ó corporacion pueda causar su supresion; mas aqui no se trata ni se debe tratar de eso; no es necesario sustituir otras rentas porque bastantes tienen aquellos sobre quienes pueda recaer la abolicion del voto.

Ademas de los señores Procuradores cuyos votos hemos transcrito, tomaron parte en la discusion de esta materia los señores Montilla y Pestaña; pero no pudo percibirseles sino palabras sueltas. A este último se le oyó con claridad que deseaba se eliminase de la peticion la palabra *condonar*, y tambien se le entendió esta frase: ¿permitiría un tribunal de justicia cobrar los atrasos de una cosa que se estaba percibiendo por un título falso?

Se preguntó si la materia estaba suficientemente discutida, y se decidió que si.

El señor Serrano pidió en seguida que se votase por partes, apoyándose en que algunos señores Procuradores querian aprobar la 1.<sup>a</sup> y desear la 2.<sup>a</sup> — Sobre esto hubo una complicada y breve discusion, y al fin se decidió que habia lugar á votar en la totalidad. — Ocurrió otra nueva discusion, no ya sobre la materia, sino simplemente sobre cual habia de ser la 2.<sup>a</sup> cuestion que se propusiese á votos, y por fin se resolvió que fuese, si se aprobaba en su totalidad la peticion sin perjuicio de descender á las particularidades que comprende: y así se aprobó; pero como esta votacion no escusase la de hacer otras para cada una de las partes de dicha peticion, aun produjo esto otra discusion confusa que ocasionó la siguiente proposicion del señor secretario Gonzalez: pido al Estamento que la votacion recaiga sobre la

verdadera peticion, con exclusion de la oposicion de los motivos que la preceden. — Esta proposicion fue aprobada, y en seguida y por consecuencia la 1.<sup>a</sup> parte de la peticion que comprende simplemente la abolicion de voto. — En cuanto á la 2.<sup>a</sup> parte propuso el señor Martine de la Rosa, y fue apoyado por el señor Lopez, que se suspendiese la discusion hasta el sábado, en que debe discutirse el proyecto de ley presentado por el gobierno, y así se resolvió.

El señor secretario Gonzalez dijo que como uno de los individuos que habian firmado la oposicion, y para ser consecuente con sus principios, proponia que se suprimiese ó alterase la parte relativa á la batalla de Clavijo, á lo que contestó el señor marques de Falces, que cuando se hubiese aprobado toda la peticion pasaria probablemente á la comision de correccion de estilo, y en ella se harian las alteraciones convenientes.

El señor presidente, en conformidad del reglamento, indicó por segunda vez que el sábado se discutiria el proyecto de ley presentado por el gobierno sobre abolicion del voto de Santiago; dió para orden del día de la sesion siguiente la continuacion de los asuntos pendientes y discusion sobre medidas sanitarias. Y cerró la de hoy á las tres menos cuarto.

*Peticion presentada por los señores Procuradores de la nacion á S. M. en la sesion del 29 de agosto de 1834.*

### PRAGMATICA DE DERECHOS DE LOS ESPAÑOLES.

“Señora: Los Procuradores del reino se dirigen á V. M. por primera vez con la peticion mas importante que puede ocupar su augusta atencion, y la meditacion de un gobierno representativo.

El objeto de todos los Gobiernos justos es la felicidad de las naciones que presiden, y el de V. M., que se ha distinguido con tantas y tan repetidas pruebas de prudencia y sabiduria, nos ofrece la halagüeña esperanza de ver bien pronto restaurados los primeros derechos del hombre social. El bienestar de los españoles depende de la restauracion de aquellas leyes fundamentales que en tiempos mas felices dieron estabilidad y gloria al trono, prosperidad á los pueblos, y honor á nuestros mayores.

Las sociedades políticas no han tenido ni deben tener otro objeto ni fin que el principio de utilidad que consultando los intereses de los asociados, corresponde perfectamente á la conveniencia general que liga y estrecha á todos los miembros que las componen. Los pactos fundamentales de las naciones mas ilustradas de Europa, han avanzado firmemente sus primeros derechos, y con ellos se han elevado á un grado de prosperidad y de grandeza que causan nuestra admiracion; pero esta admiracion se convierte en doloroso recuerdo cuando traemos á la memoria el olvido á que fueron condenadas nuestras semejantes y antiguas leyes por la mano de un poder tiránico que abatió á un tiempo derechos imprescriptibles, prosperidad y gloria de los españoles.

V. M. nos ha asegurado solemnemente que el Estatuto Real ha echado los cimientos, y que toca á los ilustres Próceres y Procuradores del reino concurrir á que se levante la obra con aquella regularidad y concierto, que son prendas de estabilidad y firmeza. Los Procuradores no conocen otro medio mas seguro de levantarla con firmeza, que el establecer por cimiento los derechos fundamentales de toda sociedad política. Sin libertad civil y seguridad personal, el hombre no tiene dignidad, ni representa derechos: es mas bien un ser degradado que se ultraja sin respeto: ¡condicion dura y estado violento, que produce siempre consecuencias desastrosas! Pero por fortuna V. M., lejos de querer la degradacion de los españoles, desea que se eleven á la esfera de ciudadanos y hombres.

La restitucion de tan importantes derechos es siempre oportuna y justa; y con ella V. M. adquirirá mayores títulos al amor y reconocimiento de los españoles, que por utilidad y conveniencia sostendrá con el último sacrificio los derechos legítimos del trono.

Los actos del hombre que tienen por objeto el trabajo, la utilidad, el bienestar, la satisfaccion de necesidades y lícitos deseos, y por fin, el ejercicio de una libertad combinada con todos los intereses y con todas las acciones de la vida, no pueden dejar de ser el primer elemento constitutivo de toda organizacion social. Contrariar estos actos y el ejercicio de la libertad civil en toda la estension que permitan leyes bien meditadas, y que arreglen acertadamente sus verdaderos límites, es el temerario intento de los gobiernos opresores.

La esclavitud, Señora, no tiene derechos, porque los usurpó el poder y la fuerza; pero los hombres libres, como V. M. quiere que sean los españoles, sienten la necesidad de su preciosa libertad civil, y por ella claman la opinion pública, y el interés del trono y de los pueblos. Los españoles por espacio de tres siglos han tenido por ilícitos todos los actos que no agradaban á la autoridad, por inocentes que ellos fuesen: pero una nueva era indemnizará la nacion de las usurpaciones que la degradaron y envilecieron.

La ignorancia de los primeros principios y el desenfreno

de un despotismo ciego pudo concebir solamente los errores mas clásicos y perniciosos á la institucion social: nuestros mayores que no desconocieron esta verdad, consignaron el derecho fundamental de la libertad civil en diferentes leyes, así como la estableció don Alfonso el Sabio en la ley 1.<sup>a</sup>, título 22, partida 4.<sup>a</sup>: aquel ilustre legislador estableció “que la libertad civil es el poderío que ha todo hombre naturalmente de hacer lo que quiere; solo que fuerza ó derecho de ley non gelo embargue.”

Los Procuradores del reino no pretenden debilitar la accion del gobierno, y estan bien convencidos de que la autoridad suprema del poder ejecutivo debe tener la fuerza suficiente para regir la nacion. Pero al mismo tiempo saben que el poder no se debilita con la libertad individual, porque conoce que los gobiernos justos que mandan con leyes, son fuertes y estan sostenidos por el vigor y fuerza moral que ellas comunican á las autoridades establecidas.

Las garantías políticas son muy debiles cuando ellas no afianzan derechos positivos. El Estatuto Real con la institucion de Cortes, con la discusion y consentimiento de las leyes, y con la votacion de las contribuciones, nos ofrece garantías que serian muy útiles si tuviésemos asegurados los derechos fundamentales que protegen las personas y la propiedad; pero tales garantías fundadas en derechos políticos, rara vez consultan la estabilidad y firmeza de las instituciones sociales, y frecuentemente las dejan espuestas á las consecuencias de una inconsistencia funesta. Si por razones que no son de este lugar, se reduce el ejercicio de los derechos políticos á un corto número de españoles, la libertad civil no debe sufrir mas restriccion que la que es absolutamente necesaria para conservar el orden público.

La libertad de imprenta no es menos importante que los demas derechos del hombre social. La facultad de transmitir y publicar los pensamientos, es anterior á los demas actos de la vida, y seria una tiranía encadenar las ideas y poner trabas á la propagacion de la ilustracion.

Por la imprenta se instruye el pueblo y el gobierno; y por ella triunfa la verdad sobre el error. Las naciones que han protegido esta institucion, han desterrado la ignorancia, han difundido las luces, y se han elevado á la cumbre de la prosperidad.

Ademas, la libertad de imprenta es el baluarte y escudo de la defensa comun, y vigilante centinela de los derechos del ciudadano: es el órgano de la opinion pública y el medio de prevenir errores y corregir desaciertos.

La tiranía solamente se asusta de esta institucion, y á fuerza de calumnias pretenden desacreditarla; á ella se atribuyen injustamente los desórdenes y la anarquía que sobrevienen despues de los cambios políticos, y muchas veces se presentan como la causa eficaz de las revoluciones. Pero los que así piensan son, sin conocerlo, los autores de los males y los provocadores de las revoluciones, porque no conocen otros sentimientos que los de sus pasiones.

La imprenta libre puede ser alguna vez el medio de los abusos; pero estos pueden reprimirse con leyes meditadas con detencion. Si la institucion es esencialmente buena y útil, no puede variar de esencia por el abuso que cometa la indiscrecion. Las leyes represivas corregirán los estravios de la imprenta; y entre tanto, los efectos saludables de la institucion se sentirán en la nacion. La opinion pública tan respetable para los gobiernos representativos, sería satisfecha con la imprenta libre, si la viera colocada al lado de nuestros derechos fundamentales.

Los Procuradores bien penetrados del precio que merece la seguridad personal, no dudan que este derecho, aplicado como garantía de la libertad individual, contribuirá eficazmente á mejorar la condicion y suerte de los españoles.

El poder del gobierno y la potestad judicial, no deben vulnerar arbitraria ni impunemente este derecho, si el ciudadano ha de confiar en la salva-guarda de las leyes sabias y justas: con una conciencia tranquila y con el seguro ejercicio de la libertad civil, nada debe temer del poder que nunca amenazará la seguridad personal, sino quebrantando las leyes.

La inseguridad de las personas es un mal de graves consecuencias que deben evitar las leyes. La vida, el honor, la reputacion, la propiedad, el crédito, y hasta las esperanzas de mejorar de fortuna, se pierden con la triste idea de verse privado de la libertad civil. El hombre que es arrastrado á una prision, aunque sea sin causa fundada, y aun cuando justifique su inocencia, ofrece la idea triste del crimen, y enagena la confianza de sus conciudadanos: esta es una pena severa, y el que la impone arbitrariamente, debe sufrir el castigo que merece semejante atentado. Si un publicista celebre que merece los aplausos de la Europa culta puede servirnos de testo, diríamos que “todo acto de la autoridad de hombre á hombre, que no se funda en la absoluta necesidad, es tiránico.” La nacion no conoce la necesidad de atacar á la libertad civil y la seguridad personal, afianzadas por leyes fundamentales, y la violacion que sufran estos derechos, es injusta, criminal y digna de castigo, cualquiera que sea el infractor.



La igualdad legal forma otra base del derecho público de las naciones, sin la cual se alteran los principios inmutables de justicia, y se establece el germen del desorden.

Los privilegios han sido en todos tiempos la señal del fuerte contra el débil, y el medio de burlar frecuentemente los preceptos de las leyes. Los privilegios no son otra cosa en realidad que la exclusión de las personas del mandato de la ley.

Las naciones cultas han desterrado ya la desigualdad ante la ley en los casos comunes, y han proscrito los tribunales privilegiados y con ellos la diversidad de penas por las mismas acciones y delitos.

La complicación, la confusión y efectos perniciosos de los privilegios, nunca útiles y siempre onerosos, deben desaparecer de una legislación que tenga por base la justicia y la conveniencia pública. Los delitos y las penas no deben tener mas que una medida común, porque si el daño que se causa a la sociedad es el fiel regulador del castigo, ninguna persona, cualquiera que sea su clase, debe ser excluida de la ley. El asesinato que comete el noble ó el rico no es menos criminal que aquel que perpetra el plebeyo ó el pobre; y el robo que ejecuta el sábio ó la muger, causa el mismo daño á la sociedad que aquel que comete el ignorante ú otro hombre: todos deben ser iguales ante la ley; porque la nación que arma el brazo de la justicia para castigar al que la ofende, y protege los miembros que la componen, no conoce diferencia en las personas, y pesa solamente el daño, la ofensa y la gravedad de los delitos.

En la misma forma debe la ley premiar y castigar, pues así como las cargas públicas obligan á todos igualmente, de la misma manera deben todos ser igualmente protegidos. Los derechos civiles, así como las penas que tienen por base la igualdad, descansan sobre el cimiento indestructible de la justicia; ella distribuye y da á cada uno lo que es suyo, y nadie debe ser exento de sus preceptos, prohibiciones y protección.

Nuestras antiguas leyes fundamentales establecieron este derecho, y el Fuero Juzgo nos ofrece un testimonio irrefragable de esta verdad; pero mas particularmente el Fuero Real y la ley 1.<sup>a</sup>, tit. 2.<sup>o</sup>, lib. 3.<sup>o</sup> de la Novísima Recopilación: en ella se ordena que el efecto de la ley sea común á todos así varones como mugeres de cualquier estado que fuesen. A vista de esta demostración tan evidente, no se podrá negar el principio de que nuestras antiguas leyes establecieron la igualdad, y que su restablecimiento es una materia importante que debe ocupar un lugar preferente en nuestros derechos fundamentales.

La propiedad que es fruto de los trabajos y afanes del hombre, ó del dominio legítimamente adquirido, es un derecho tan respetable, que sin él no puede existir vínculo alguno social.

La conveniencia y la utilidad de la sociedad afianzó con mas firmeza este derecho esencial, por el cual los hombres se fijan en un país y tienen patria. Sin él los hombres se verían reducidos á la vida errante, como todavía se observa en las hordas salvajes de los indios yucatanos en la América del Sur.

No importa ahora averiguar con los publicistas investigadores el origen y antigüedad de la propiedad; bástanos conocer su importancia para apreciarla debidamente.

Este principio se ha establecido de tal modo, que no puede existir un gobierno que mas ó menos deje de respetarlo: mas este respeto no debe confiarse al convencimiento de los hombres, ni á la voluntad de los mandatarios del poder: para salvarle es necesario sentar la inviolabilidad de la propiedad, para que no sufra los ataques arbitrarios, ni quede espuesta á las confiscaciones bárbaras de un fisco ambicioso.

Afortunadamente la nación se ha puesto en el camino de las reformas y de las mejoras, y guiada por V. M., no es de esperar que volvamos á los tenebrosos tiempos de la ignorancia; pero es necesario para continuar con paso firme por la vía de los progresos lentos, restablecer la inviolabilidad de la propiedad y asegurarla de los ataques simulados de un poder codicioso.

Don Juan II en las Cortes de Valladolid el año de 1448, penetrado de las razones incontestables, en que nuestros legisladores fundaron su petición, sancionó la ley 6.<sup>a</sup>, tit. 4.<sup>o</sup>, libro 3.<sup>o</sup> de la Novísima Recopilación: en ella se ordena que nadie puede ser despojado de sus bienes sin ser llamado, oído y vencido en juicio, y que en contrario no valgan las cartas del rey. El respeto que esta ley ordena guardar al derecho de propiedad, equivale y constituye una verdadera inviolabilidad. Nuestros legisladores se propusieron defender este derecho fundamental, y al tiempo que amarraron las manos del poder supremo del Estado, establecieron la independencia judicial, y marcaron reglas á los tribunales para que no abusaran de su potestad.

La utilidad pública cuando lo exigiese con previa indemnización, las contribuciones votadas por las Cortes, los perjuicios de tercero y las penas pecuniarias son las excepciones de esta inviolabilidad; en otro caso es un crimen atacar este derecho fundamental. Los estravíos de los gobiernos que nos han precedido hollaron de tal modo este derecho, que las leyes quedaron reducidas hasta hoy á una vana sombra, y la inviolabilidad de la propiedad sepultada en el olvido. Pero V. M. nos ofrece sinceramente la esperanza de restablecer los derechos de los españoles, y entre ellos debe contarse el de inviolabilidad de la propiedad que aumentará los capitales, la riqueza y prosperidad nacional.

V. M. ha conocido ya la importancia de la responsabilidad de los secretarios del despacho, y por esto es inútil demostrar su conveniencia. Basta solamente indicar que es muy fácil que los ministros abusen de sus vastas atribuciones y autoridad inmensa, y que conviertan contra la nación los medios y recursos de que dispone el poder.

Pero no será por mas pedir á V. M. que en consecuencia de lo que prefiere el art. 139 del reglamento del Estamento de Procuradores á Cortes, se comprenda como ley fundamental el principio de la responsabilidad ministerial, y los casos que dan lugar á ella. La infracción de las leyes fundamentales y la trición y concusión son delitos que merecen la represión y la condigna corrección de los ministros.

La Milicia Urbana, que es la mejor defensa y garantía de las libertades públicas, merece ser considerada en nuestras leyes fundamentales. Su institución en los momentos de peligro ha correspondido á la seguridad del trono y esperanza de la nación. El ciudadano que se arma voluntariamente por la patria, por la defensa de las leyes y por el sosten de los derechos de la nación y de la corona, ofrece seguridad y confianza, y es la mejor salvaguardia del orden público. Los vínculos que le ligan á la sociedad, el amor á la patria, sus relaciones, su familia y su interés propio responden sobradamente de la conveniencia de esta institución.

V. M. penetrado de la gran utilidad de su creación quiso inspirar confianza á la nación con su formación. Organizar este cuerpo nacional sobre bases diferentes, y arreglar del modo mas conveniente su aumento, deberes y disciplina es obra de los reglamentos de que el gobierno ha asegurado ocuparse. Resta solamente que la institución se comprenda en el número de nuestras leyes fundamentales para que la nación descansa en la garantía de su propia fuerza: en esta virtud

Los Procuradores del reino piden á V. M. que se digne sancionar como derechos fundamentales los que contiene el proyecto siguiente:

Artículo 1.<sup>o</sup> La libertad individual es protegida y garantida; por consecuencia ningún español puede ser obligado á hacer lo que la ley no ordena.

Art. 2.<sup>o</sup> Todos los españoles pueden publicar sus pensamientos por la imprenta, sin previa censura; pero con sujeción á las leyes que reprimen los abusos.

Art. 3.<sup>o</sup> Ningún español puede ser perseguido, preso, arrestado, ni separado de su domicilio, sino en los casos previstos por la ley, y en la forma que ella prescribe.

Art. 4.<sup>o</sup> La ley no tiene efecto retroactivo; y ningún español será juzgado por comisiones, sino por los tribunales establecidos por ella antes de la perpetración del delito.

Art. 5.<sup>o</sup> La casa de todos los españoles es un asilo que no puede ser allanado, sino en los casos y forma que ordena la ley.

Art. 6.<sup>o</sup> la ley es igual para todos los españoles; por lo mismo ella protege, premia y castiga igualmente.

Art. 7.<sup>o</sup> Todos los españoles son igualmente admisibles á los empleos civiles y militares, sin mas distinción que la capacidad y el mérito; por tanto todos deben prestarse igualmente á las cargas del servicio público.

Art. 8.<sup>o</sup> Todos los españoles tienen igual obligación de pagar las contribuciones votadas libremente por las Cortes en proporción de sus haberes.

Art. 9.<sup>o</sup> La propiedad es inviolable, y se prohíbe la confiscación de bienes; sin embargo, la propiedad está sujeta.

1.<sup>o</sup> A las penas legalmente impuestas y á las condenaciones hechas por sentencia legítimamente ejecutoriada.

2.<sup>o</sup> A la obligación de ser cedido al Estado cuando lo exigiere algún objeto de utilidad pública, previa siempre la indemnización competente á juicio de hombres buenos.

Art. 10. La autoridad ó funcionario público que ataca la libertad individual, la seguridad personal ó la propiedad, comete un crimen, y es responsable con arreglo á las leyes.

Art. 11. Los secretarios del despacho son responsables por las infracciones de las leyes fundamentales, por los delitos de traición y concusión, y por los atentados contra la libertad individual, seguridad personal y derecho de propiedad.

12. La Milicia Urbana se organizará en toda la nación en conformidad de los reglamentos y ordenanzas que discutieren y aprobaran las Cortes.

Madrid 18 de agosto de 1834.—Señora: A L. R. P. de V. M.—Antonio Gonzalez.—Conde de las Navas.—Fermín Caballero.—Telesforo de Trueba Cosío.—Vicente Cano Manuel y Chacon.—Joaquín María Lopez.—Agustín García de Atocha.—Andrés Visado.—José Villanueva.—Miguel Chacon.—Marcos Fernandez Blanco.—Marcos Marin.—José Llanos.—Rufino García Carrasco.

#### SESION DEL DIA 29 DE AGOSTO.

Se abrió á las diez y media.

El señor secretario Gonzalez leyó el acta de la sesión antecedente la cual fue aprobada sin discusión.

El Sr. secretario Caballero dió cuenta de un oficio del ministro de estado y del despacho de Marina remitiendo 150 ejemplares impresos de la esposicion leida por el mismo; y de otro del señor ministro de Guerra incluyendo tambien 180 ejemplares impresos de la memoria por él leida al Estamento. De ambos oficios quedó este enterado.

Dió cuenta asimismo el referido señor secretario de una petición firmada por los señores Procuradores Alonso, Santafé, Tejada, Cáceres, Carrasa, Villalar, Belmonte, Somoza, Cano Manuel, Maza, Acebedo y Martel, dirigida á que el gobierno coloque una inscripción nacional en el sitio que juzgue mas oportuno que consigne los beneficios debidos á la Reina Gobernadora, y principalmente haga duradera la memoria del célebre día 24 de julio de 1834: cuya petición manifestó habia pasado según exige el reglamento á tres comisiones, siendo estas las del Interior, corrección de estilo y guerra, y haber acordado las mismas que no hay obstáculo en que se discuta en publico.—Determinó el señor presidente que dicha petición se discuta el martes próximo.

El señor Latorre, como relator de la comisión de poderes, dió cuenta de haber examinado la misma esposicion de don Francisco Serrano, Procurador por Jaén, en que incluye ya rectificadas sus documentos del modo mas completo, y de que juzga la misma comisión que deben aprobarse. Así se acordó.

Se pasó á la orden del día que era la discusión de la petición acerca de las medidas sanitarias.

El señor secretario Belda leyó dicha petición, y los votos de las comisiones que la habian examinado.

En seguida el mismo señor tomó la palabra para manifestar que aun cuando el gobierno habia satisfecho en gran parte los deseos de los peticionarios en cuanto á facilitar las comunicaciones, no se hallaba cumplido enteramente el objeto de dicha petición, y que insistia en que se discutiese, tanto para llenar la segunda parte, á que todavia no se ha atendido, cuanto para dar alguna especie de apoyo por medio de la resolución de las Cortes á la parte primera, ya puesta en ejecución por el gobierno. Continuó esplayando esta idea manifestando las medidas adoptadas en otros países.

El Sr. Medrano dijo que no se proponia hablar contra la petición, estando por el contrario conforme en lo sustancial de ella, mas que juzgaba que los términos en que se halla concebida debian sufrir alteración, ciñéndose á pedir que S. M. se sirva mandar que se forme un proyecto de ley sobre medidas sanitarias.

El Sr. Ministro del Interior dió gran copia de esclarecimientos acerca de las buenas medidas adoptadas por el gobierno desde la invasión del cólera en España: manifestó los obstáculos con que habia habido que luchar, y los que todavia existian, para hacer libre la comunicación, los que continuarian á tener lugar hasta que los pueblos por convencimiento propio abandonasen las preocupaciones que abrigan: dijo que aprovechaba gustoso el momento en que se trataba de tal materia para pagar un justo tributo de loor á las autoridades de Madrid, y para darlas un testimonio de gratitud por los esfuerzos que constantemente han hecho en el peligroso estado en que se ha encontrado la capital, encerrándose hasta en los hospitales, y no perdonando medios ni fatigas para contribuir á la salvación de sus conciudadanos; y terminó haciendo una reseña de los fondos empleados en socorros en varias provincias de la monarquía, cuyo total asciende á 1.803,593 rs. vn., sin contar medio millon dado á la Andalucía en el año de 1833.

El Sr. Lopez del Baño ilustró la materia facultativamente haciendo ver con ejemplos sacados de esta capital, de Sevilla y de otras partes, que allí donde ha habido mas socorros se han verificado menos estragos, y propuso que sin desatender lo que en la petición se requiere, se hiciese principalmente conocer á los pueblos, ilustrándolos por cuantos medios se juzguen mas acertados, que la enfermedad no es contagiosa, y que es de su propio interés el no poner obstáculos á la comunicación.

El Sr. Domech, si bien aplaudiendo la petición en todas sus partes, y manifestando que no la desaprobaba si se proponia á votación, juzgó no haber necesidad de elevar al trono una propuesta sobre cosa que el mismo gobierno ha de mandar, y que hasta pudiera turbar los ánimos, siendo cierto que estos se irritan contra todo lo que se opone á sus arraigadas preocupaciones; y concluyó deseando que las peticiones llevasen en sí tal presunción de urgencia y de bondad, que no dejasen otro arbitrio al poder, que acceder ó comprometer su opinion en caso de negativa.

El Sr. Trueba impugnó al preopinante en cuanto á no juzgar necesaria la petición. Aclaró la cuestión acerca de si es ó no contagioso el cólera, concluyendo por la negativa con ejemplos deducidos de experimentos hechos por los estudiantes de la facultad de medicina de Paris, que se habian inyectado el virus del cólera, y con el de un tal Errada en Barcelona, que absorbió el vomito de un cólico, sin por eso quedar este ni aquellos contaminados; y terminó votando á favor de la petición.

El Sr. Batron limitó su discurso á decir que lo necesario seria suplicar á S. M. se dignase nombrar una junta que proponga los mejores medios sanitarios, así como que se faciliten los mayores auxilios que sea posible.

El Sr. Abargues dijo que por su parte no juzgaba podia haber inconveniente en retirar la primera parte de la petición, visto hallarse ya su objeto prevenido por el gobierno: pero que en cuanto á la segunda se debia cometer á una junta científica que propusiese un reglamento con oportunas medidas sanitarias.

El Sr. Chacon indicó varios abusos que han tenido lugar con motivo del cólera, y entre otros el de tener que pagar algunos pueblos pobres y de corta poblacion sumas harto crecidas para el pago de los dependientes de las juntas sanitarias, y terminó pidiendo tambien que se formase inmediatamente el reglamento en cuestion.

El Sr. Torremegía hizo ver que desde el año 1815 está abierto el expediente para la formación del reglamento requerido, que se han tomado detenidas informaciones, y que no es objeto de poco momento. Dijo tambien que puesto que el gobierno se esta ocupando de un proyecto de ley sobre medidas sanitarias no le parecia que debia pedirse aquello mismo que ya se estaba ejecutando, ni creia que era esto usarse del derecho de petición con el detenimiento, y para el fruto conveniente, que le parecia en fin que los señores que habian hecho la petición de que se trataba, conociendo ahora no haber grande urgencia, convendrian en retirarla, lo que él estimaba oportuno; porque toda la petición debe llevar en sí un caracter de necesidad que no divisaba en esta.

El Sr. conde de las Navas comenzó su discurso manifestando que se alegraba mucho de que el Estamento coincidiese en ideas con el gobierno, pero que no por eso se perdía nada en satisfacer lo que la petición requería, pues nada importaba que el voto del Estamento se encontrase con lo que el gobierno tuviese ya preparado; continuó diciendo que convenia en la dificultad de combatir los abusos y preocupaciones de pueblo; pero que todo el mundo sabe que sin ser necesario chocar de frente con dichos abusos se pueden combatir indirectamente, y concluyó expresando que aunque el gobierno esté trabajando en la misma línea, se debia aprobar la petición para que lo que en ella se requiere se llegue á verificar lo mas pronto posible.

Juzgada la materia suficientemente discutida, y habiéndose decidido que habia lugar á votar sobre ella, se aprobó la petición con una enmienda propuesta por el señor secretario Belda.

El señor presidente dió para la orden del día de la inmediata sesión la discusión del proyecto de ley sobre abolición del voto de Santiago y continuación de los asuntos pendientes; cerrando la de este día á la una y media.